

Dueños y señores del gas:

Las petroleras ponen uno, se llevan diez

Expertas en el arte de encandilar a los gobernantes de turno y bajo el amparo de una lesiva legislación y gravosos contratos, poderosas transnacionales petroleras se han convertido en amos y señores del gas boliviano: en sus manos están 80 mil millones de dólares, que es el valor actual de las reservas gasíferas.

Aunque nominalmente las reservas de gas, mientras se mantengan en el subsuelo, están bajo el dominio del Estado boliviano, en los hechos las petroleras extranjeras que operan en el país tienen el control total de esas reservas y el derecho absoluto de su explotación, producción, comercialización y venta en los mercados internos y externos.

“El verdadero propietario (del gas) resulta ser el que lo extrae, transporta, comercializa y se queda con el producto de la venta. El dueño (del gas), finalmente, es el que disfruta de los beneficios y no el que teóricamente aparece como tal en la letra muerta de la Carta Magna”, aseguró el ex rector universitario y economista de izquierda Pablo Ramos.

Las reservas gasíferas del país, valuadas por expertos y especialistas en 80 mil



millones de dólares, están en manos de las transnacionales desde mediados de la segunda mitad de los años 90. Esta riqueza equivale al doble del capital que tiene Bolivia y a 10 veces el valor de la producción de bienes y servicios generados anualmente en el país.

Al apoderarse de esta inmensa riqueza, las petroleras extranjeras han hecho un negocio redondo, ya que sus inversiones y los riesgos que han asumido han sido mínimos y no guardan relación con sus elevadas ganancias. En cambio, al ceder la propiedad de estas millonarias reservas, Bolivia ha perdido su mayor posibilidad para salir del atraso y la marginalidad, que la sitúan desde mucho atrás como la más pobre de Sudamérica.

Si el Estado boliviano fuera el propietario de las reservas de este energético, el menos contaminante y de gran demanda mundial, fácilmente podría salir de sus agudos problemas: el valor de las reservas de gas, detectadas en territorio nacional, equivale a 16 veces el total de la deuda externa y supera en más de 130 veces la inversión pública anual.

LOS PROPIETARIOS

Las reservas naturales de gas descubiertas en Bolivia alcanzan a 52 trillones de pies cúbicos, la segunda más importante de Sudamérica y superior a la que tienen en conjunto Argentina, Brasil, Chile y Perú. Las reservas probadas alcanzan 27 trillones de pies cúbicos y las probables a 25 trillones. Las reservas probadas de Venezuela son de 147 trillones, de Argentina 27 trillones,

de Brasil 8 trillones y de Perú 13 trillones, según datos de principios del 2002 de International Energy.

Las empresas extranjeras que controlan la mayor parte de las reservas bolivianas son Petrobras, Total, Maxus y Repsol, que en conjunto tienen la propiedad y el derecho de explotación sobre el 80 por ciento de las reservas. Las empresas Chaco y Andina, dirigidas por las transnacionales Amoco, British Petroleum y Repsol YPF y en las que hay participación accionaria minoritaria de ciudadanos bolivianos, controlan el 15 por ciento de las reservas. Chaco y Andina han sido constituidas sobre la base de la privatización parcial de la ex empresa estatal del petróleo (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB).

PROPIEDAD DE LAS RESERVAS DE GAS

EMPRESAS	% RESERVAS
Petrobras	33 %
Total	23 %
Maxus / Repsol	21 %
Andina / Repsol YPF	9 %
Chaco / Amoco / British Petroleum	6 %
Otras	8 %

Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos

Estas transnacionales también controlan las reservas probadas y probables de casi un millón de barriles de gasolina natural y gas licuado de petróleo, que son hidrocarburos líquidos asociados al gas natural.

El 85 por ciento de estas reservas (de gas y líquidos) se encuentra en el departamento de Tarija, en el sur de Bolivia, siendo los campos de Margarita, San Alberto y San Antonio, los más importantes.

AUGE DE LAS INVERSIONES

El dominio absoluto de las petroleras extranjeras sobre el mercado hidrocarburi-fero boliviano ha sido posible por el alejamiento estatal de la actividad petrolera y la privatización de la empresa estatal (YPFB), por una legislación muy liberal como la Ley de hidrocarburos de 1996, la total liberalización del mercado de hidrocarburos, bajísimos niveles tributarios y el contrato de venta de gas al Brasil.

Con la construcción binacional del gasoducto al Brasil, las inversiones se acrecentaron notablemente. “La inversión en exploración y explotación de hidrocarburos entre 1997 al 2001 asciende a 2.450 millones de dólares. Si incorporamos los 585 millones de dólares programados para el 2002, se tiene que en seis años se invirtieron muy cerca de 3.035 millones de dólares, con un promedio anual de 505 millones de dólares”, asegura el experto petrolero Álvaro Ríos.

En el transporte de hidrocarburos, la inversión también ha sido significativa, especialmente con la construcción del gasoducto a Brasil y de las plantas de compresión que demandaron una inversión (binacional/estatal) de 600 millones de dólares. Su propiedad actual es de Enron, Shell, Transredes, Petrobras y otros socios minoritarios.

Otras inversiones de importancia son: el gasoducto a Cuibá (Enron/Shell), la mejora de los gasoductos y oleoductos en el mercado interno (Enron/Shell), el gasoducto Gasyrg (Repsol YPF/ Petrobras/Total) y otros proyectos en transporte de gas y líquidos (British Gas, Plupetrol)

“La actividad de transporte en el sector de hidrocarburos ha concentrado una inversión aproximada de 1.600 a 1.700 millones de dólares entre 1997 y el 2002, resultando en un promedio de 283 millones de dólares al año”, según los datos oficiales.

Esta millonaria inversión, de casi cinco mil millones de dólares desde 1997, aunque ha desarrollado la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos no ha tenido, sin embargo, efectos significativos sobre la economía nacional. “Bolivia –según explica Ríos– no es un país que produce bienes y servicios tecnológicos que la industria petrolera requiere y, por tanto, las inversiones que se han mencionado no aterrizan en el país. Se estima que solo el 5 por ciento queda como contribución local”.

GRANDES BENEFICIOS

En cambio, los beneficios han sido significativos e inmediatos para las transnacionales, tal como admitió hace poco el principal ejecutivo en Bolivia de la petrolera Repsol YPF, Roberto Maella: “la rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta; por cada dólar invertido, una empresa petrolera gana 10 dólares”.

La elevada rentabilidad de las transnacionales petroleras es mayor en el país por los reducidos tributos que pagan al Estado, por los elevados precios de venta de hidrocarburos y combustibles en el mercado interno, por las grandes facilidades y ventajas concedidas en el contrato de exportación de gas al Brasil y por el escaso y nulo control que ejercen las autoridades sobre estas



empresas, lo que les ha permitido burlar el pago de impuestos, inflar sus costos e inversiones y maquillar su contabilidad.

Los expertos, como Ríos, estiman que las petroleras, como único aporte a la economía nacional, pagan en regalías y otros impuestos un total de 25 a 30 por ciento del valor de la producción en boca de pozo, fijada a un nivel muy bajo.

Otra fuente de gran rentabilidad para las petroleras es su control absoluto del mercado interno. Hasta principios del 2003, los ciudadanos y consumidores en Bolivia pagaban por los hidrocarburos producidos en el territorio nacional cinco dólares por encima del precio internacional. “Esto era increíble”, dijo en su momento el propio presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los principales artífices de la destrucción de la empresa estatal del petróleo y del masivo ingreso de las transnacionales al país.

Las condiciones del contrato de exportación de gas al Brasil también influyen para generar ganancias extraordinarias para las petroleras, tal como ocurrió en el 2002. El contrato establece que las petroleras extranjeras (Repsol YPF, Total, Petrobras y otras) reciben de Brasil el pago por los volúmenes contratados y programados de gas natural, pero solo pagan impuestos y regalías al Estado boliviano por los volúmenes producidos y exportados. En la pasada gestión, Brasil consumió menos de la mitad de lo previsto, pero pagó por el total previsto, con lo que las petroleras extranjeras obtuvieron ingresos extraordinarios libres de impuestos.

GAS A ESTADOS UNIDOS

En busca de mayores niveles de rentabilidad, las transnacionales que tienen en sus manos la riqueza de Bolivia están buscando transformar el gas en dinero fresco mediante la exportación de este energético

al mercado de Estados Unidos. Según la ingeniería financiera de este proyecto, por cada dólar que sea pagado en impuestos, las petroleras se embolsillarán 20, situación que está siendo cuestionada por amplios segmentos de la población que cree que los beneficios son tan exiguos para Bolivia (70 millones de dólares en ingresos al año) que más valdría que la riqueza hidrocarburífera se quede en el subsuelo para su uso en el futuro.

El multimillonario proyecto de Pacific LNG, consorcio conformado en junio del 2001 por las trasnacionales British Gas (BG), British Petroleum (BP) y Repsol/YPF, consiste en la exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos de gas hasta los mercados de Estados Unidos durante 20 años. En todo ese tiempo se estima que, desde los campos hidrocarburíferos del sur de Bolivia, se suministraría un total de 6,26 trillones de pies cúbicos de gas a la industria y a la comunidad estadounidense.

El transporte del gas, un energético cada vez más valioso por ser ecológico y poco contaminante, se daría en dos fases. La primera, consistiría en el transporte del combustible en un gasoducto desde los campos de Tarija, Bolivia, hasta el puerto chileno de Patillos en el Pacífico. En ese puerto, se instalaría una planta para licuificar el gas. En la segunda fase, el gas ya convertido en líquido sería transportarlo en barcos metaneros, vía marítima, hasta un puerto en Norteamérica donde se lo regasificará para luego ser transportado por la distribuidora norteamericana Sempra a través de ductos hasta California, en Estados Unidos.

La ingeniería del proyecto, la elección del puerto, las negociaciones con los compradores en Estados Unidos (el consorcio Sempra Energy, subsidiaria de Enron) y los precios de compra y venta del energético son responsabilidad exclusiva de Pacific LNG. Como es un negocio privado, el Estado boliviano solo participa como coadyu-



vante en las gestiones de trámite internacional para viabilizar los contratos binacionales, en la concesión de los puertos de embarque y licuefacción del gas en el Pacífico y avalando los compromisos privados en el tiempo.

Sin embargo, la generalizada percepción ciudadana sobre los escasos beneficios que reportará este negocio para Bolivia y la elección de un puerto chileno como vía de salida virtualmente han obligado al gobierno a tratar de mostrar que en materia de gas el Estado es algo más que un simple cobrador de impuestos.

Como en Bolivia hay un arraigado sentimiento antichileno, resultado de la guerra del Pacífico de 1879 y de la pérdida del Litoral marítimo, las autoridades se han dado a la tarea de generar un curioso y estéril debate nacional sobre la conveniencia de exportar el energético ya sea por

puertos chilenos o por puertos del Perú, a pesar de que Pacific LNG ya hizo su elección por el puerto de Patillos, en Chile.

La salida del gas boliviano por puertos peruanos nunca fue sugerida, ni menos alentada, por este consorcio transnacional, que es en definitiva quien tomará la decisión de exportar o no el gas hacia los Estados Unidos, según las normas propias de una economía de libre mercado, vigente en el país desde 1985.

Por ello, no extrañó a nadie que días atrás, las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos publicitaran los resultados presentados por Global Energy, una consultora contratada por el gobierno, que recomendó al puerto chileno de Patillos como la mejor vía de salida del gas boliviano, tal como quería el consorcio Pacific LNG.

En el puerto se prevé una inversión de 2.500 millones de dólares para infraestructura portuaria y una planta de licuefacción. El proyecto, en su conjunto, demandaría una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares durante un quinquenio.

Pese a ello, el negocio exportador ha sido virtualmente congelado, por lo menos

temporalmente, ante el temor de nueva espiral de conflictos sociales. Mayoritarios segmentos de la población dejaron en claro, en los primeros meses del 2003, que no estaban de acuerdo con la venta de gas a Estados Unidos en condiciones tan desventajosas para el país.

La renuncia de uno de los principales impulsores del proyecto, como fue el ex ministro de Hidrocarburos, Fernando Illanes, y dificultades entre Pacific LNG y la distribuidora Energy, contribuyeron también para que el proyecto se torne mucho más incierto.

Varios autores

Econoticiasbolivia.com
(La Paz, marzo 30 de 2003)

